Una vez más sobre la transmisibilidad de la indemnización por daño moral

"...La tesis de la intransmisibilidad de la acción, nos parece, sí tiene un fundamento que la justifica y que podría calificarse de económico, en la terminología de la sentencia que comentamos. Se trata simplemente de evitar el enriquecimiento sin causa."

Miércoles, 11 de enero de 2017 a las 12:12 | Actualizado 12:12

Hernán Corral

En febrero de 2012, en este mismo sitio observábamos cómo la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema comenzaba a acoger firmemente la tesis, propiciada por Ramón Domínguez Águila, y apoyada por Enrique Barros, de que si la víctima de un ilícito extracontractual fallece sus parientes no pueden reclamar la indemnización del daño moral sufrido por ella en la calidad de herederos, sino el resarcimiento del daño moral propio como víctimas indirectas ([ver columna aquí](#)). La tesis de la intransmisibilidad de la acción de responsabilidad por daño moral, surgida en el ámbito de los accidentes del trabajo con muerte del trabajador (cfr. C. Sup. 27 de junio de 2007, rol N° 309-2006; 27 de noviembre de 2007, rol N° 6196-2006; Rol 2073-2009), se comenzaba a ampliar a otras materias (C. Sup. 29 de septiembre de 2011, rol N° 2073-2009; C. Sup. 11 de agosto de 2015, rol N° 8278-2013).

Sin embargo, a fines del 2016, la cuarta sala de la Corte Suprema, por sentencia de unificación de jurisprudencia, redactada por el abogado integrante y destacado profesor de Derecho Civil Carlos Pizarro Wilson, inesperadamente ha dado un giro hacia la doctrina antigua que no veía obstáculos para que, fallecida la víctima, sus herederos demandaran la indemnización del daño moral que había padecido su causante. Curiosamente, se trata de un caso de accidente del trabajo análogo a los que hicieron emerger la teoría de la intransmisibilidad del daño moral (C. Sup. 27 de septiembre de 2016, rol N° 33.990-2016).

Ha de tenerse en cuenta que en toda esta materia hay presente un elemento procesal de mucha importancia: se trata de la competencia de los tribunales del trabajo contemplada en el art. 420 letra f) del Código del ramo que dispone que serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo "los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N° 16.744". Según esta norma, los jueces laborales sólo pueden conocer las causas en las que se haga valer la responsabilidad civil contractual en que el trabajador demande al empleador, y se deja fuera de la jurisdicción laboral las acciones de responsabilidad extracontractual, que necesariamente serán materia de un juicio ordinario ante los tribunales civiles. ¿Qué sucede entonces? Que si los familiares del trabajador fallecido en el accidente piden que se les indemnice su propio daño como víctimas indirectas o por repercusión, siendo esta acción una de responsabilidad extracontractual, no podrían interponerla en sede laboral sino únicamente en sede civil. De allí el interés de "encubrir" esta acción como si no fuera propia de los familiares, sino la misma que habría nacido para el trabajador y que a su muerte los herederos (que suelen coincidir con los familiares) han encontrado en el patrimonio hereditario. Invocando la calidad de herederos se hace posible que la causa sea sustanciada por los tribunales y con los procedimientos de la jurisdicción especial del trabajo, claramente más rápida y flexible que la de los tribunales civiles en un juicio ordinario.

Pero ante la omisión del legislador de modificar la norma, la que sobrevive a ya dos grandes reformas laborales, parece que la Corte ha decidido retornar a la teoría tradicional propiciada por Alessandri en su tratado de 1943, a favor de la transmisibilidad de la acción indemnizatoria por daño moral.

Para ello ha debido refutar los argumentos en los que se basa la idea de la intransmisibilidad. Frente a alegación de que el daño moral sería personalísimo por cuanto se trata de una aflicción que sólo sufre la víctima directa, la sentencia sostiene que desde que el daño moral se entiende en un concepto más amplio que el mero *pretium doloris* esta idea debería desecharse. Además, señala el fallo, de que el daño sea personal o individual, es decir, que sólo lo padezca una determinada persona y por tanto sea intransmisible en cuanto daño, no se deriva la intransmisibilidad de la acción

indemnizatoria que, siendo en equivalente monetario, tiene un carácter patrimonial y puede, por tanto, transmitirse por causa de muerte.

La sentencia también refuta el argumento de que la transmisión del daño moral frustra el fin reparatorio de la indemnización. En contra arguye que la patrimonialidad de la indemnización determina la existencia de una cosa mueble (la acción) que se transmitiría como las demás que existan en el patrimonio del causante. Para cerrar el tema, la sentencia se limita a constatar que en la pretensión indemnizatoria del daño moral "como cualquier acción indemnizatoria lo que se busca con su ejercicio es el pago de una cantidad de dinero que refleje el daño ocasionado" (cons. 5º).

El razonamiento de la Corte prosigue con argumentos en favor de la transmisibilidad, que básicamente se sostienen en el hecho de que ninguna norma ha declarado que la acción indemnizatoria del daño moral sea intransmisible ni tampoco habría algún criterio económico y de confianza que permitieran construir una excepción a la transmisibilidad de los derechos contemplada en los arts. 1097 y 951 del Código Civil. Frente a la invocación del art. 88 de la Ley Nº 16.744, de Accidentes del Trabajo, que dispone que "los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e irrenunciables", se replica que el precepto se refiere a las prestaciones de seguridad social y no a las indemnizaciones por responsabilidad que según el art. 69 de dicha ley se rigen por el derecho común.

El fallo concluye disponiendo que "la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina, en la especie, la posibilidad de los herederos de reclamar la indemnización del daño moral padecido por el causante, debiendo entenderse la acción transmisible conforme a los artículos 951 y 1097 del Código Civil, sin que sea óbice lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 16.744".

Sin duda se trata de un tema difícil, tanto que nosotros mismos hemos cambiado de opinión. La sentencia cita correctamente la primera edición de nuestras *Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual* de 2003 que seguía la doctrina tradicional de la transmisibilidad. Pero luego, los contundentes argumentos esgrimidos por el Profesor Ramón Domínguez Águila ("Sobre la transmisibilidad de la acción por daño moral", en *Revista chilena de derecho*, vol. 31, Nº 3, pp. 493-514), y nuestra propia reflexión, nos inclinó hacia la teoría contraria, tímidamente en un artículo del año 2010 ([ver artículo aquí](#)) y categóricamente en la segunda edición de nuestras *Lecciones* (Thomson Reuters, 2013, pp. 357-358). Es también la opinión que le parece preferible a Enrique Barros Bourie (*Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2010, nº 743, p. 947).

La tesis de la intransmisibilidad de la acción, nos parece, sí tiene un fundamento que la justifica y que podría calificarse de económico, en la terminología de la sentencia que comentamos. Se trata simplemente de evitar el enriquecimiento sin causa. Los herederos, en cuanto tales, recibirán una cantidad de dinero que estaba destinada a permitir a quien padeció el daño extrapatrimonial financiar algún bien o actividad que de algún modo atenúe su pérdida. Y nótese que el heredero podría ser la cónyuge del trabajador que no ha sufrido dolor alguno por la pérdida de un marido del que lleva años separada de hecho, o podría tratarse de un extraño o incluso de una persona jurídica nombrada en el testamento del trabajador (al menos en la cuarta de libre disposición), sin excluir al Fisco en el quinto orden de la sucesión intestada.

La tesis de la transmisibilidad sólo adquiere plausibilidad cuando, como en el caso, los herederos son la mujer y los hijos que vivían con el trabajador fallecido. Pero ¿estarían los jueces dispuestos a otorgar una indemnización diversa si ellos, siguiendo la lógica del fallo de la Corte, demandan ahora en sede civil la reparación de su propio daño moral? Si acaso lo consiguieran, ¿no estaríamos, en la práctica, concediendo una doble indemnización?

En todo caso, y como decíamos al comienzo, podrían evitarse muchos de estos problemas si se modificara el art. 420 letra f) del Código del Trabajo para establecer una sola jurisdicción para conocer los juicios de responsabilidad por accidentes del trabajo, sea que se ejerza la responsabilidad contractual por parte del trabajador o la extracontractual por sus familiares como víctimas por repercusión.

La Cámara de Diputados aprobó el 16 de noviembre de 2016, en primer trámite legislativo, un proyecto de ley que pretende solucionar el problema (Boletín Nº 8.378-13). Pero el nuevo texto de la norma que se propone no parece que lo consiga. La nueva letra f) dispondría que los jueces del trabajo serían competentes para conocer: "f) los juicios iniciados por el propio trabajador o sus causahabientes, en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad contractual del empleador por los daños producidos como consecuencia de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Respecto de la responsabilidad extracontractual se seguirán las reglas del artículo 69 de la ley Nº 16.744, y".

Como se ve, el proyecto mantiene la duplicidad de jurisdicciones según la naturaleza de la acción de responsabilidad que se interponga, y se introduce ahora el término "causahabientes" que puede introducir mayores dudas e incertidumbres en la interpretación de la norma, Confiamos en que en el Senado el proyecto sea enmendado para que sea un solo tribunal,

sea civil o laboral, el competente para conocer de todos los juicios de responsabilidad civil derivados de un accidente del trabajo.

EL MERCURIO

Términos y condiciones de la Información © 2002 El Mercurio Online